

## LA REPATRIACION DE HONDURAS

El regreso colectivo de unos 4.300 salvadoreños refugiados de Mesa Grande, Honduras, el 10 de octubre de este año constituyó un triunfo innegable para los refugiados. Como resultado de sus propios esfuerzos desde enero de 1987, los refugiados lograron su objetivo: regresar en comunidad a sus lugares de origen o a lugares próximos a aquéllos en los departamentos de Cuscatlán, Cabañas y Chaltenango.

La repatriación constituyó una etapa nueva en términos cuantitativos en el esfuerzo de las víctimas de la represión por decidir su propio destino en el marco de la guerra. Uno de los repatriados lo explicó de la siguiente forma: "sólo el esfuerzo del pueblo y el apoyo de Dios nos ha traído aquí."

Ahora el gobierno democristiano está presentando propagandísticamente la repatriación como cosa propia y, por supuesto, con ello pretende mostrar su cumplimiento con los acuerdos de Esquipulas II. A pesar de la propaganda gubernamental que dice que la repatriación fue "parte de un plan integral de reasentamiento que contará con todas las garantías e infraestructura adecuada para nuestros connacionales," hasta última hora el gobierno hizo todo lo posible para impedir la repatriación en la forma planteada por los refugiados. La inconformidad del gobierno llegó a tal grado que la semana antes de la repatriación denunció fuertemente al ACNUR por supuesto mal manejo del asunto y por la "interferencia de agrupaciones y la injerencia de personas y grupos ajenos..."

La verdad del caso es que el gobierno nunca hizo ningún esfuerzo para repatriar a los salvadoreños de Honduras.

El gobierno de Honduras no quiere a los refugiados salvadoreños, a quienes califica de subversivos. Los refugiados siempre estuvieron sujetos a hostigamiento y a un fuerte control militar por parte de las autoridades hondureñas. Varios murieron

tratando de llegar a los campamentos, aún en 1986, atacados por el ejército hondureño.

En los últimos años se incrementaron las presiones por parte de las autoridades hondureñas. En agosto de 1985, 3 refugiados murieron cuando el ejército hondureño atacó el campamento de Colomoncagua, otros 60 resultaron heridos y 10 fueron capturados. Un estudio hecho por un asesor del Departamento de Estado en octubre de 1985 sobre los pasos necesarios para asegurar la no presencia de guerrilleros en los campamentos de refugiados salvadoreños en Honduras recomendó un aumento del control militar y administrativo por parte del gobierno hondureño. En junio de 1987 el gobierno de Honduras y el ACNUR firmaron un acuerdo según el cual el primero iba a controlar la infraestructura de los campamentos, de las actividades productivas, de la salud y de la educación, así como del personal.

Los refugiados sabían que la guerra no va a terminar pronto. Llevaban 7 años viviendo en una situación completamente anormal: campesinos que no podían trabajar la tierra, "todo el mundo se desesperaba allí. Allí estábamos presos, no podíamos salir ni para buscar leña, "aclaró uno de los refugiados."

Además de la desesperación, los refugiados tenían el ejemplo de las repoblaciones llevadas a cabo por la Coordinadora Nacional de la Repoblación en San José las Flores, San Antonio El Barillo, y Panchimalama, todas ellas resultado de los esfuerzos de los desplazados mismos. Conocían los problemas encontrados en estas repoblaciones, las capturas, las invasiones y los hostigamientos del ejército.

Los refugiados en Honduras, como salvadoreños, en teoría siempre tuvieron el derecho de regresar a su país y, de hecho, más de 2.000 refugiados habían regresado desde 1984. Los retornos anteriores fueron individuales, y sólo un porcentaje redu-

cido, estimado por el ACNUR en un 20 por ciento había logrado regresar a sus lugares de origen. Los demás regresaron para formar parte de los miles de desplazados que viven en condiciones precarias, la mayoría sin trabajo. Los refugiados que se han repatriado han sido vistos con sospecha y varios han sido capturados y acusados de delitos políticos. En muchos de estos casos, las acusaciones en contra de los repatriados tenían relación con supuesta colaboración con la guerrilla, cuando todavía vivían en sus lugares de origen, o con sus actividades en Mesa Grande.

En este contexto, los refugiados plantearon una repatriación masiva de unas 4.625 personas del campamento de Mesa Grande en una carta del 10 de enero de 1987, en la cual incluyeron los siguientes puntos que ellos consideraban condiciones mínimas para su repatriación: regreso a su lugar de origen; derecho a trabajar libremente; no al reclutamiento forzoso; no puesto militar ni defensa civil en los asentamientos; no bombardeos en los asentamientos; libertad de tránsito; derecho a ayuda de la comunidad internacional y el ACNUR; y libre acceso a los medios de comunicación. Los refugiados explicaron que deseaban repatriarse y trasladarse colectivamente a cinco zonas de sus lugares de origen: Santa Marta, (Cabañas), Copapayo (Cuscatlán); y Arcatao, San Antonio los Ranchos y Las Vueltas (Chalatenango).

Los refugiados explicaron que querían repatriarse colectivamente a sus lugares de origen porque había muchas viudas, huérfanos y ancianos que necesitaban una comunidad que velara por su bienestar. Asimismo creían que debían estar juntos para garantizar su seguridad y para hacer posible la atención de los organismos internacionales de ayuda y protección.

Estos planteamientos fueron comunicados al ACNUR y al gobierno de El Salvador. En una carta dirigida al presidente Duarte, fechada el 4 de abril de 1987, el Comité de Repoblación de Mesa Grande dijo: "consideramos que ningún gobierno de la tierra puede considerarse democrático si más de 15.000 compatriotas se encuentran concentrados en refugios fuera del país a causa de la guerra. Consideramos que ninguna gestión por resolver nuestro problema sería moral sin antes haberse consultado nuestro punto de vista."

Los refugiados empezaron a planificar su retorno con la Iglesia, la Coordinadora Nacional de Repoblación y otras instituciones que apoyaban su iniciativa. El gobierno de El Salvador mandó a su embajador en Honduras para reunirse con los refugiados en Mesa Grande el 19 de junio de 1987. Los refugiados esperaban que llevara alguna noticia sobre la repatriación, pero no tenía nada que decir al respecto. Entonces, en agosto, los refugiados anun-

ciaron su regreso el 1 de octubre aún sin una respuesta formal del gobierno.

El 7 de agosto los presidentes de Centroamérica firmaron el acuerdo de Esquipulas II, el cual incluyó la necesidad de la repatriación. A finales de agosto, al fin se llevó a cabo la tercera reunión de la comisión tripartita. En septiembre de 1984, el gobierno de Honduras había propuesto la repatriación de los salvadoreños refugiados en Honduras y la formación de una comisión tripartita compuesta por los gobiernos de Honduras y El Salvador y el ACNUR. Hasta agosto de 1987, la comisión sólo se había reunido dos veces, un ritmo de más o menos una reunión por año. Dentro de la comisión tripartita se había planteado una repatriación individual y gradual. El gobierno de El Salvador no quería una repatriación masiva, ni quería que los repatriados se asentaran en los sitios propuestos por ellos mismos. La repoblación de estas zonas no concordaba con la estrategia militar de contra-insurgencia cuyo objetivo era desalojar a los civiles de esas zonas para que no pudieran servir de apoyo a la guerrilla. El ACNUR, consciente de la actitud del gobierno salvadoreño y de la oposición de los militares, siguió sugiriendo a los refugiados que llevaran a cabo una repatriación más gradual e individual, en fin, algo más aceptable al gobierno.

El 7 de octubre los refugiados anunciaron públicamente su intención de regresar en forma colectiva el 10. Monseñor Rivera les había pedido esperar hasta que se llevara a cabo el diálogo entre el gobierno y el FMLN-FDR. El gobierno reaccionó con una especie de pánico, y como desconocía las intenciones de los refugiados o, al menos, nunca las tomó en serio, el presidente Duarte declaró que no podían regresar sin estar documentados, comprobando que realmente eran salvadoreños y que eran originarios de los lugares a donde querían regresar. El 9 de octubre, el Ministerio de Relaciones Exteriores atacó al ACNUR, a los grupos norteamericanos *Going Home* e *Interfaith* por apoyar a los refugiados en su esfuerzo de repatriarse, y caracterizó el plan de repatriación masiva como un esfuerzo para minar los planes de la comisión tripartita. Trató de presionar a Honduras y al ACNUR para que detuvieran el retorno. Sin posibilidades de detener el retorno, el gobierno trató de posponerlo y cambiar su forma.

El gobierno convocó una reunión extraordinaria de la comisión tripartita el 14 de octubre y argumentó que los refugiados no debían empezar a regresar hasta después de esta reunión. Expresó su oposición a los acompañantes internacionales y a la venida a la capital. Los refugiados planeaban dirigirse a San Salvador antes de trasladarse a sus lugares de residencia, para celebrar una misa en catedral.

Una delegación gubernamental compuesta por la

vice-ministra del interior y un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores visitó Mesa Grande la víspera de la repatriación para tratar de cambiar o modificar la decisión de los refugiados. Dijeron que la comisión tripartita había acordado que la repatriación tenía que ser individual, gradual, programada y voluntaria y que la repatriación masiva iba a "romper con el marco de Esquipulas II." El gobierno se mostró sorprendido por la cantidad de refugiados que pensaban regresar tan pronto, lo cual demuestra que nunca había tomado en serio los comunicados de los refugiados en los 9 meses anteriores. La delegación trató de explicar a los refugiados que el gobierno tenía un plan de contingencia en caso de que, de todas formas, se regresaran. Dijo que iban a dividir a los refugiados en dos grupos, unos irían a Santa Marta y los demás a las haciendas Valle Verde y Copapayo, en Cuscatlán. La delegación se quejó porque ni ACNUR ni Honduras estaban respetando las decisiones de la comisión tripartita. El gobierno salvadoreño se defendió diciendo que no era que no quisiera recibirlos, sino que quería atenderlos bien. Los refugiados respondieron, "cuando nos sacaron a bombazos, no nos sacaron ordenados."

Los refugiados mantuvieron su posición de salir para El Salvador el 10 de octubre y de dirigirse a sus lugares de origen y no a las haciendas. Expre-

saron que querían ir a la capital, que querían libre tránsito y que las delegaciones extranjeras los pudieran acompañar. El gobierno mantuvo su posición, pero al mismo tiempo necesitaba la colaboración de la Iglesia y del ACNUR. El día antes de la repatriación el ACNUR no había decidido si iba a participar y tuvo que explicar al gobierno que no podía colaborar con el plan gubernamental (de llevar a los refugiados a lugares donde ellos no querían ir), pues era contrario a su mandato el hacer algo en contra de la voluntad de los refugiados.

Fue hasta las 9:30 de la noche del 9 de octubre que el ACNUR decidió participar en la repatriación, después de la decisión del gobierno salvadoreño de dejar a los refugiados ir a los cinco lugares previstos. El gobierno no aceptó, sin embargo, el viaje a San Salvador ni la entrada en el país de la delegación extranjera.

Dentro de Mesa Grande los refugiados se prepararon para salir en buses, organizados por asentamiento. El ACNUR contrató más de 200 buses y camiones. No obstante, sólo lograron sacar a los tres primeros grupos el sábado. Los refugiados tuvieron que prepararse mucho antes y pasaron toda la noche preparando la salida. Tenían que llevar comida para tres días. Los refugiados llegaron a la frontera en caravana cansados y nerviosos después de tantos años de no ver su país y sin saber qué



recepción les esperaba, pero al mismo tiempo llegaron animados por estar otra vez en tierra salvadoreña. Muchos de los niños nunca habían salido del campamento. Dijeron que más de la mitad de los repatriados eran niños.

Primeros vieron a los soldados salvadoreños y después fueron recibidos por los representantes del arzobispado de San Salvador. Los esperaban unos 40 puestos de migración especialmente arreglados, donde los entrevistaron con un formulario especial de 23 preguntas que la Cuarta Brigada utiliza en las repatriaciones individuales. Entre las preguntas figuraban el motivo por el cual abandonaron su lugar de origen, si aceptarían el regreso al lugar de origen, aún bajo condiciones de violencia subversiva, y su recomendación para terminar con la violencia y lograr la paz.

Se hicieron presentes en el puesto fronterizo los coroneles Canjura y Gómez y el Ministro de Interior. El coronel Canjura, comandante del Destacamento Militar No. 1, con sede en Chalatenango, explicó, "lo que pedimos es que se dediquen a cultivar la tierra, trabajar honradamente, porque si se meten con la guerrilla tendrán problemas con nosotros. Hasta el momento no los hemos investigado y los estamos dejando pasar." Tres de los asentamientos de repatriados están bajo la jurisdicción del Destacamento Militar No. 1. En la frontera también había soldados tomando fotos y otros vestidos de civil, quienes habían vivido en Mesa Grande y, según informes, ahora trabajan con el ejército.

El sábado en la tarde salió el primer grupo de 1.004 personas con rumbo a Santa Marta. ACNUR insistió que no podían ir a San Salvador tal como los refugiados habían planteado ni tampoco esperar a los demás refugiados. Encontraron problemas en el camino porque las autoridades no querían dejarlos pasar hacia San Salvador, donde mucha gente estaba esperándolos en catedral, y querían mandarlos por una carretera entre Aguilares y Suchitoto. Los motoristas no querían ir por esta ruta y la gente temía que los llevaran a Valle Verde (una de las haciendas propuestas por el gobierno). Al fin tuvieron que pasar la noche cerca del cuartel de la Guardia Nacional, llegando a Santa Marta hasta el día siguiente.

El grupo con más problemas fue el de Copapayo. Este grupo terminó de pasar por migración el sábado en la tarde. La caravana salió hacia las cinco de la tarde. Los refugiados del último bus se bajaron en El Poy y dijeron que no iban a seguir hasta que pasaran los demás por la frontera y tuvieran la misa. Entonces se fueron a interceptar la caravana por La Palma. Ahí todos acordaron no seguir hasta que pasaran los de Chalatenango por la frontera y tener la misa todos juntos. Se iban a quedar en La Palma, pero el ejército los regresó cerca de El Poy, donde esperaron los demás.

El domingo en la mañana, los de Copapayo estaban un poco arriba del Poy esperando. El grupo de Las Vueltas ya había sido procesado por migración, pero se mantuvo en los buses dentro del área de migración, esperando la salida de los de Copapayo. No habían entrado aún los de Arcatao ni los de Los Ranchos en la zona fronteriza. Circulaban rumores de que el ACNUR no los iba a sacar de Mesa Grande hasta que salieran los de Copapayo y Las Vueltas. A las diez de la mañana empezaron a procesar a los del grupo de Arcatao.

Hubo una reunión el domingo entre los representantes del arzobispado, la CNR, el comité de refugiados del grupo de Copapayo, ACNUR, la vice-ministra del interior y la Fuerza Armada. Al fin acordaron que cada grupo saldría directamente hacia su lugar, que el ejército daría paso libre a las caravanas, que el Ministerio del Interior iba a agilizar la documentación de los repatriados una vez que estuvieran en sus lugares de origen y que la Iglesia y el ACNUR iban a acompañarlos.

Después de esta reunión, salió el grupo de Copapayo, pero la situación no estaba resuelta todavía. Al salir, los refugiados optaron por ir a la catedral en San Salvador. El ACNUR insistió que ir a la catedral sería violar los acuerdos ya tomados. Después de varias horas de discusión, resolvieron seguir hacia Copapayo. Ni el ACNUR ni la Iglesia estaban dispuestos a acompañar a los refugiados hasta San Salvador. Después de las discusiones y atrasos llegaron a San Martín a las 2 de la mañana. Un oficial les dijo que no podían pasar a Suchitoto. Dijo que tenía órdenes de dirigirlos hacia Sensuntepeque y después a Santa Marta. Ellos explicaron que el grupo de Santa Marta ya se había ido y que ellos tenían que ir a Suchitoto. Al fin, el oficial habló con el estado mayor y permitió que pasaran a Suchitoto. Llegaron a Suchitoto a las 4 de la mañana. Una vez ahí se dirigieron al templo parroquial e inmediatamente los soldados rodearon el lugar. En la mañana hubo una misa poco alegre. La gente estaba cansada, con hambre, aislada, sin suficiente agua ni servicios sanitarios. Se consiguió hospedaje para los repatriados en un colegio, donde había más espacio y donde se podía cocinar. Los militares se mantuvieron afuera, vigilantes.

Como la calle que conduce a Copapayo estaba en desuso, los repatriados tuvieron que tomar lanchas. El transporte no fue fácil por la lechuga que llena el embalse. Después de varios días se logró trasladar a todos los repatriados con sus pertenencias.

El grupo de Las Vueltas tuvo que quedarse dos noches en Comalapa por falta de transporte. Los buses urbanos no podían transitar por la calle que conduce a Las Vueltas. La mayoría de los vehículos no llegaron hasta Las Vueltas, dejando a los repa-

triados y sus pertenencias en El Zapotal. En Las Vueltas, la población de unas 300 personas, casi todos repatriados de Mesa Grande, esperaba desde el sábado. El mismo sábado 10 llegaron soldados del Batallón Belloso furiosos contra la población acusándola de dar cobertura a la guerrilla. Ese día mataron a un guerrillero en los alrededores de la población. Los habitantes se sintieron atemorizados y por eso quitaron los carteles de bienvenida que habían puesto. Los soldados se quedaron en Las Vueltas y dijeron que no iban a salir hasta que vinieran los refugiados.

Los últimos en entrar fueron los de Arcatao y Los Ranchos. Tuvieron una misa en la frontera, con Monseñor Rosa antes de salir hacia Guarjila. Cantaron sus cantos de esperanza, los mismos de Mesa Grande. Los dos grupos (un total de unas 1.500 personas) decidieron quedarse juntos en Guarjila, debido a las dificultades para llegar a sus destinos. Los pobladores de San José las Flores y Arcatao bajaron en procesión con banderas blancas pocas horas después de la llegada de los refugiados para darles la bienvenida.

La actitud del ejército se ha ajustado en todo a lo expresado por el coronel Canjura. Los militares piensan que los refugiados apoyan a la guerrilla y que van a tener problemas si se relacionan con ella, pero por el momento los dejaron pasar. También han cuestionado su derecho a la tierra.

El gobierno al no poder detener los planes de los refugiados, optó por tratar de incorporarlos dentro de sus planes de contrainsurgencia, propagandizando sus acciones como parte de su cumplimiento con los acuerdos de Esquipulas II. El Ministerio de Cultura y Comunicaciones exhibió un programa de televisión de 15 minutos presentando el proceso de repatriación como un esfuerzo conjunto del gobierno y del ACNUR dentro de los acuerdos de Esquipulas II, dejando al margen los esfuerzos de los refugiados, los cuales fueron los que hicieron posible la repatriación.

Los esfuerzos del gobierno para meterse en estas nuevas comunidades no han dado muchos resultados hasta ahora. Los refugiados vinieron con ideas bien claras sobre cómo iban a organizar sus comunidades y con recuerdos inolvidables de los maltratos que recibieron de las autoridades. Los que tienen tierra están compartiendo con los que no tienen. En Santa Marta, Guarjila y Copapayo, representantes del gobierno han llegado a ofrecer ayuda. En Santa Marta ofrecieron trabajo en un proyecto de la AID para mejorar la carretera, pagando 6 colones al día. Los refugiados explicaron que estaban trabajando en comunidad para levantar las casas de todos y que podría haber divisiones si algunos trabajaran aparte por un salario, "nosotros venimos en comunidad y tenemos que trabajar en comunidad." En cambio, cuando los repatriados pidieron materiales para el



sistema de agua potable, los funcionarios respondieron que el gobierno no podía dar esta clase de materiales. El gobierno ha ofrecido ayuda en alimentos, letrinas, escuelas y reparación de calles.

En Santa Marta, los repatriados han decidido compartir la ayuda que les llegue con miembros de la comunidad ya existente y han empezado a trabajar colectivamente en la construcción de casas.

El 9 de noviembre, soldados bajo el mando del coronel Benjamín Canjura, jefe de Destacamento Militar No. 1 de Chalatenango, llegaron al asentamiento de Guarjila en una acción cívico-militar, llevaron alimentos, peluqueros, dentistas y payasos. Pero los habitantes se retiraron a sus casas, no queriendo acercarse a recibir los donativos. Recordaron por qué se habían ido de sus lugares hace años. Como dijo una mujer antes de salir de Mesa Grande, "en mi lugar murieron 30 familias, primos y hermanos, y una abuelita que tenía 104 años y unos niños que tenían un año y otro de brazos. Los niños los tiraban para arriba y los cachaban con los cuchillos los soldados." No parece tan fácil que los refugiados acepten de repente la buena voluntad del ejército. Y no todos los hechos violentos son del pasado. El 24 de octubre, en Arcatao, los soldados asesinaron al joven maestro Francisco Rivera. Ha habido ataques aéreos cerca de varios de los asentamientos después de la llegada de los repatriados. El mismo coronel Canjura obstaculizó la llegada de alimentos enviados por la Iglesia a Guarjila y una visita pastoral de Monseñor Rivera Damas el 17 de octubre, insistiendo que se presentara al cuartel para pedir permiso.

El problema más sentido en la actualidad por los repatriados, aparte de los problemas prácticos de construir las casas y preparar la tierra, es la falta de documentos de identidad. Sin documentos, los repatriados temen movilizarse, pues se sienten en constante peligro de ser considerados sospechosos. Ni migración ni el Ministerio del Interior les proporcionaron ningún tipo de documentación cuando fueron entrevistados en la frontera. El go-

bierno, conjuntamente con el ACNUR, se ha comprometido a documentar a todos los repatriados. El proceso tomará tres meses; primero documentarán a quienes ya tienen certificados de nacimiento, seguirán los niños nacidos en Honduras, los nacidos en El Salvador pero no inscritos, los niños entre 10 y 16 años, los jóvenes de 16 a 18 años y "otros." Es decir, la mayoría de los adultos, quienes corren más peligro, tendrán que esperar hasta la última etapa. Mientras tanto la Iglesia ha empezado a proporcionarles documentos con fotografía en los cuales los identifica como repatriados bajo su protección. Aunque este documento no tiene ningún efecto legal, puede minimizar el miedo de los repatriados a ser identificados como subversivos.

El llegar a sus respectivos lugares de origen es sólo el comienzo para los repatriados. El futuro no es nada seguro y todo queda por hacer. Del ACNUR han pedido protección. Pero no es tan claro qué papel va a o puede jugar el ACNUR en este campo en El Salvador. El ACNUR parece más interesado en buscar fondos para proyectos de desarrollo, pero los refugiados temen que estos proyectos sean implementados por agencias gubernamentales. Los repatriados, por su parte, se han mostrado muy firmes respecto al gobierno, el cual no va a decir cómo manejar sus comunidades. Confían en la ayuda de las iglesias y de las agencias para impulsar sus comunidades, pero están preocupados por su seguridad.

Saben que la guerra sigue y que están en zonas conflictivas, donde no van a tener seguridad, pero pese a todo tienen esperanzas y determinación. Los repatriados no son pasivos ni impotentes. Han venido con un plan para preparar la tierra, construir casas provisionales y un mínimo de infraestructura, además de proyectos de producción. Dicen que aprendieron mucho durante sus años en Mesa Grande y van a aplicar esos conocimientos aquí.

C. P.